

PALABRAS DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, CAMILO GÓMEZ ALZATE, EN LA INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SUSTITUCION DE CULTIVOS

San Vicente del Caguán, 29 de junio de 2000

PROCESO DE PAZ

La paz sí es posible. Todos los colombianos la estamos anhelando y estamos empeñados en sacar adelante un acuerdo que nos permita construir una paz estable y duradera en nuestro país. Hace aproximadamente año y medio estamos sentados, conversando, construyendo confianza y trabajando en un proceso de negociación serio, maduro y con bases sólidas, para lograr construir, mas temprano que tarde, un país próspero, sin violencia y con justicia social.

Toda Colombia está unida en torno a este proceso de paz. El Gobierno Nacional y las FARC tenemos la responsabilidad histórica de no defraudar el sentir y el querer de los colombianos.

Es hora de que podamos vivir en un país en paz. En un país donde el campo sea una de las principales fuentes de trabajo y progreso. En un país en donde todos los colombianos tengan un empleo digno y un ingreso justo. En un país donde los niños puedan ser niños y los jóvenes estén libres del flagelo de la droga. En un país donde vivamos con tranquilidad y seguridad y no esclavizados por el miedo a la muerte y el secuestro. En un país en donde el respeto y la tolerancia sean los principios que rijan la convivencia ciudadana y donde el Estado esté al servicio de los ciudadanos. Un país donde las armas no sean más el lenguaje de la confrontación ideológica y donde se cambien para siempre por los instrumentos del trabajo, del diálogo y del desarrollo.

Los colombianos sabemos que el camino de las armas y la confrontación no lleva a ninguna parte. Que ni con las armas ni con la violencia se acaba el desempleo, se corrigen las desigualdades, o se construye un país más justo. Todo lo contrario: generan desempleo y pobreza, hacen más hondos los abismos sociales y son un tremendo factor de injusticia y de violación de los más elementales derechos humanos. Por eso estamos decididos a reconciliarnos.

El apoyo de la comunidad internacional es fundamental para el éxito de este proceso. Su participación es indispensable para fortalecer la negociación, hacerla menos vulnerable a la coyuntura nacional y para brindarle apoyo a los compromisos adquiridos, dentro de las vías institucionales para la cooperación.

Su asistencia a esta Audiencia Pública Internacional sobre Sustitución de Cultivos y Medio Ambiente es prueba del respaldo y del compromiso de la comunidad internacional con la construcción de la paz en Colombia. Para el Gobierno Nacional es muy importante que ustedes conozcan de primera mano esta problemática.

EL NARCOTRAFICO Y COLOMBIA

Colombia siempre ha sido tradicionalmente un país con una economía estable y con una democracia y unas instituciones sólidas.

Hace sólo tres décadas, en 1970, la sociedad colombiana se estremecía con los 49 secuestros que para ese año se presentaron, apenas el 1.6% de los que ocurrieron el año

pasado. Las cifras de homicidio se encontraban dentro de los rangos estándares para todos los países del mundo. En ese año se presentaron 4.570 homicidios, es decir solamente el 18% de los que ocurrieron en 1999. Igualmente, para esa época sólo el 3% de las entidades bancarias que sufren hurtos hoy, eran víctimas de la actividad delincuencial.

Es evidente que hace 30 años los ciudadanos colombianos podían salir a las calles y las carreteras con mucha más tranquilidad de lo que lo hacen hoy. Colombia era una nación en desarrollo, con gran claridad frente a lo que quería lograr y con una franca disposición para trabajar por mejorar los problemas que en ese entonces se presentaban.

Pero para mediados de la década de los setenta, el crecimiento de los cultivos de la marihuana y el auge de los marimberos cambiaron el rumbo del país: Apareció el fenómeno del narcotráfico, marcando la historia de la sociedad colombiana en muchas de sus dimensiones.

El cultivo, el procesamiento y el tráfico de estupefacientes se convirtieron en sinónimos de dolor, daño y pobreza. Como una plaga, el problema mundial de las drogas empezó a penetrar

las actividades del Estado y la sociedad, causando daños irreparables al país.

Narcotráfico y violencia van de la mano como una pareja inseparable. Todas las actividades relacionadas con ese delito, desde el cultivo hasta la comercialización en mercados extranjeros, implican siempre una amenaza de muerte y destierro para miles de personas.

En efecto, al observar con detenimiento las cifras, se encuentra una clara tendencia, que se inicia a principios de los ochenta: En la medida en que aumentaron las hectáreas de cultivos ilícitos y las toneladas de cocaína exportadas, aumentó también el número de homicidios. Por ejemplo, en 1982 se enviaron 90 toneladas de cocaína al exterior y se registraron 10.665 homicidios. Para 1989, hay 44.670 hectáreas de cultivos ilícitos, se enviaron al exterior 5 veces más toneladas de cocaína que en el 82 y el homicidio se duplicó, llegando a 22.772. Una década después tenemos que la extensión de cultivos ilícitos se ha triplicado y el homicidio continúa en una tendencia ascendente llegando el año pasado a 24.357 casos.

El narcotráfico le enseñó a toda una generación a vivir de la violencia, con la violencia y para la violencia, pues la cultura del dinero fácil quebrantó los más básicos valores éticos y morales de la sociedad, dejando en los jóvenes la creencia de que a la vida humana se le puede poner un precio y convirtiéndolos en verdaderos mercaderes de la muerte. Es la generación del “no nacimos pa’ semilla”, es la generación de los niños sicarios, que crecieron con total desesperanza en la vida misma y que ni siquiera lograron llegar a su edad adulta.

Pero esto no acaba allí. El narcotráfico también trajo consigo el terrorismo, el miedo de la población, las bombas colocadas en lugares de alta concurrencia de personas que nada tenían que ver en esa guerra demencial. Igualmente, los ataques desatados contra la Policía Nacional dejaron más de 1.500 policías muertos en un período de cuatro años, quedando miles de familias desmembradas ante la ausencia del padre, el hijo o el esposo. Y nuestros mejores hombres y mujeres, valientes líderes políticos, jueces y periodistas, cayeron ante las balas cobardes de la delincuencia organizada.

Pero no es sólo violencia lo que engendra el flagelo del narcotráfico. Otro de sus efectos más perversos ha sido la

corrupción, que penetró todas las capas de la sociedad y de las instituciones de poder, y que pervirtió los valores públicos que por tantos años habíamos atesorado.

Es así como esa Colombia progresista y llena de esperanzas de 1970, con un gran potencial por explotar en todo sentido, sufrió un fuerte y doloroso impacto a raíz del fenómeno del narcotráfico.

No obstante, es tal y tan grande el potencial de esta sociedad, que seguimos creciendo y continuamos siendo esa Colombia que mira hacia delante, muy a pesar de los obstáculos impuestos por los narcotraficantes.

Quiero recordar aquí las palabras del señor Presidente Pastrana en su discurso de posesión cuando dijo: “Debemos hacer un corte de cuentas de los profundos daños que le ha causado a nuestra sociedad el fenómeno del narcotráfico.”

Hoy quiero detenerme sobre un daño que se constituye en un perjuicio mundial porque afecta la vida de todo el ecosistema del planeta: los daños ecológicos y ambientales que genera este delito.

MEDIO AMBIENTE

Las actividades que involucran el cultivo, procesamiento, transporte y exportación de sustancias ilícitas implican la deforestación de centenares de miles de hectáreas de bosques, trayendo consigo la muerte para cientos de especies de fauna y flora. Igualmente, se estima que por cada hectárea de coca cultivada se generan más de dos toneladas métricas de desperdicios químicos, los cuales son vertidos en lagunas, caños y ríos, arruinando así importantes cuencas hidrográficas. De nuevo el narcotráfico interfiere con la vida, creando ciclos de devastación y muerte.

Esta problemática ha generado el agotamiento y la destrucción de la oferta natural, que es la base primordial de la calidad de vida y del desarrollo futuro de los colombianos.

El efecto es devastador. La siembra de una hectárea de coca significa la destrucción de 3 hectáreas de bosque. La siembra de una hectárea de amapola representa la tala de 2,5 hectáreas de bosques. Adicional a esto, la utilización de sustancias agroquímicas, como fungicidas e insecticidas,

genera efectos de contaminación del recurso hídrico, pérdida de flora y fauna, y pérdida de nutrientes del suelo, entre otros.

Se calcula que entre 1984 y 1998 se utilizaron más de 900.000 toneladas de precursores químicos en la producción de estupefacientes, que fueron a parar a nuestra tierra, y se incautaron aproximadamente 11 millones de galones y 11 millones de kilogramos de sustancias químicas para el procesamiento de droga.

Los efectos de los cultivos ilícitos empobrecen considerablemente el suelo, desplazan la fauna y alteran la biodiversidad. Pero, además, sólo generan más incremento de la pobreza, la alteración de sistemas culturales, la disminución y desintegración de pueblos indígenas, el deterioro de los niveles de solidaridad entre los diferentes grupos sociales y la destrucción de las relaciones de parentesco.

De la misma manera, mientras exista una gran demanda internacional de narcóticos, el país o cualquier otra región con aptitud para la producción de cultivos ilícitos, continuará respondiendo con una oferta que hará perpetuar el problema.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

El problema de las drogas ilícitas es un problema mundial y como tal debe ser tratado. Por eso Colombia ha insistido, y la comunidad internacional ha comprendido y apoyado esta idea, en que la lucha contra el mismo debe apoyarse en un principio de responsabilidad compartida, que involucre los esfuerzos de toda la comunidad internacional, desde los países productores hasta los consumidores, incluyendo también a aquellos que producen y venden los precursores químicos indispensables para la elaboración de la droga y a aquellos donde se efectúa el lavado de los activos producto del delito.

Los colombianos y todos los países del mundo deben entender con claridad la razón del gobierno colombiano para luchar contra el narcotráfico: Lo hacemos por una profunda convicción ética y no por imposición. Lo hacemos porque estamos comprometidos con la búsqueda de un mejor porvenir para las futuras generaciones.

Como incentivo para continuar en esta lucha el Gobierno Nacional tiene siempre en mente a las madres y los padres de los drogadictos, y el sufrimiento que ellos padecen con la

situación de sus hijos. En Colombia existen aproximadamente 400.000 adictos a sustancias ilegales; son personas que están poniendo en riesgo no sólo su salud, sino su vida familiar, social y laboral.

A este país le duelen los 13.9 millones de drogadictos que se calcula existen en Estados Unidos y los más de 188 millones de personas que, según las Naciones Unidas, consumen drogas ilícitas en el mundo entero. Por ellos luchamos, porque nos impulsa a trabajar el que no haya mas personas en esta situación, ni más sufrimiento por este crimen. Y por ello necesitamos la unión y colaboración internacional, porque es un fenómeno con muchas ramificaciones y muchos frentes por atacar.

En este sentido, el Gobierno Nacional ha planteado tres estrategias para continuar la lucha: En primer lugar, trabajamos en la persecución de organizaciones de narcotraficantes a nivel nacional e internacional. Aquí no se puede dudar del irrevocable compromiso de Colombia en este campo, pues los resultados son contundentes. Solamente para mencionar dos de las operaciones más recientes y más importantes quiero referirme a los resultados de la Operación Milenio I y II. En

efecto, con la captura de 76 personas, muchas de ellas con solicitud de extradición hacia Estados Unidos, se logró dismantelar una de las más grandes y recientes estructuras delincuenciales involucradas en actividades de narcotráfico.

Un segundo instrumento implementado por el Gobierno Nacional para la lucha contra el narcotráfico es la fumigación de cultivos. Es muy difícil, como ustedes han podido observar, realizar la destrucción manualmente, ya que se trata de grandes extensiones de cultivos que, cuya erradicación no sería significativa, si no se hace con tecnología.

Es así como durante los últimos cinco años se ha alcanzado la erradicación efectiva de 176.000 hectáreas de cultivos de coca, por medio de la aspersión de glifosato. En total, se han fumigado más de 230.000 hectáreas de coca y amapola desde 1.995.

Si bien con estas operaciones la Policía Nacional ha logrado reducir el número de hectáreas cultivadas con coca, amapola y marihuana de 133.500 el año pasado a 115.000 este año, la erradicación total de los cultivos ilícitos se dificulta gracias a la

movilidad de los terratenientes que siempre están buscando nuevos espacios para sembrar su delito.

Pero para lograr una mayor efectividad en la lucha contra los carteles y la fumigación, se requiere de un programa de sustitución de cultivos, el cual se constituye en el tercer instrumento del Gobierno de Colombia contra el narcotráfico.

Hemos empezado por cambiar el enfoque de intervención local por uno más amplio de intervención regional, con el fin de lograr concretar un modelo integral de Desarrollo Alternativo, en el que se cuente con una oferta institucional adecuada, para la participación organizada de la población afectada por los cultivos ilícitos.

Dentro de esta perspectiva, el Gobierno Nacional ha desarrollado el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, el cual enfrenta la problemática de los cultivos ilícitos a través de un modelo de intervención integral. Este modelo contiene tres elementos centrales que lo conforman: Primero, el reconocimiento de las poblaciones regionales y de sus sistemas de producción. Un segundo elemento es la oferta institucional que promueve proyectos de desarrollo

socioeconómico sostenibles, competitivos y de carácter regional.

Por último, es necesario recalcar la vital importancia de la participación de las comunidades, autoridades regionales, locales y del sector privado para la potencialización del capital humano y social de las regiones.

Quiero, finalmente, reiterar los agradecimientos del Gobierno Nacional por la participación de las importantes delegaciones en esta Audiencia Pública Internacional.

Citando al Presidente de la República, “hoy el narcotráfico es el primer enemigo de la paz y ésta no se logrará cabalmente sin el desmantelamiento de las organizaciones que se dedican al negocio maldito de la droga y sin que logremos alternativas y soluciones sostenibles económica y socialmente. Mi país, como ningún otro, ha cargado sobre sus hombros el peso de la lucha contra el narcotráfico. Por esto, quiero aprovechar esta excepcional oportunidad para invitar a todos los países de la comunidad mundial a que le demos pleno desarrollo al principio de la responsabilidad compartida, para la lucha contra el problema mundial de la droga”.

Muchas gracias.